Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **06680/INFOEM/AD/RR/2024**, interpuesto por **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, en lo sucesivo la **Recurrente**, en contra de la respuesta del **Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios**, en lo subsecuenteel **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución.

# A N T E C E D E N T E S

## PRIMERO. Del Acceso a Datos Personales.

Con fecha veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, la Recurrente presentó a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México (**SARCOEM**) ante el Sujeto Obligado la solicitud de acceso a los datos personales registrada bajo el número de expediente **00724/ISSEMYM/AD/2024**, mediante la cual requirió le fuese entregado lo siguiente:

«SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL AVISO DE MOVIMIENTO DE BAJA DEL FALLECIDO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PADRE DE MIS HIJAS MENORES DE EDAD, LO ANTERIOR CON FINES DE INICIAR EL TRAMITE DE PENSIÓN POR ORFANDAD, CLAVE ISSEMYM DEL FALLECIDO XXXXXXX.» (Sic)

Modalidad de entrega: **Copia certificada**

La particular al momento de interponer su solicitud de acceso a datos, adjuntó los archivos electrónicos denominados **«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.pdf»** y **«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.pdf»**, cuyo contenido será detallado en el estudio correspondiente.

## SEGUNDO. De la solicitud de aclaración por parte del Sujeto Obligado.

De las constancias que obran en el expediente electrónico del SARCOEM se advierte que el Sujeto Obligado, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veinticuatro, requirió a la particular, mediante el documento denominado **«ACLARACIÓN 724.AD.2024.pdf»**; con el que se requirió a la particular para que presentara el documento con el que acredite la representación de la persona referida en la solicitud mediante un poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos especificando que la representación se le otorgó para el trámite de acceso a datos personales ante ese Sujeto Obligado, debido a que no se observa ningún documento adjunto que acredite la representación y el consentimiento de la persona fallecida; asimismo, se le apercibió con tener por no presentada la solicitud en el supuesto de no desahogar la prevención.

## TERCERO. No Presentó Aclaración.

Asimismo, en el expediente electrónico SARCOEM, se observa que la solicitante no desahogó el requerimiento de Aclaración, por lo que en fecha cuatro de octubre de dos mil veinticuatro el Sujeto Obligado respondió a la particular mediante el documento denominado **«NO PRESENTADA-AD.pdf»**, informando lo siguiente:

«Con fundamento en el artículo 111, segundo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se le hace de su conocimiento que se tiene por no presentada la solicitud de aclaración citada al rubro, en virtud de que no presento aclaración complementación o corrección de datos de la solicitud quedando a salvo sus derechos para volvería a presentar. En virtud de lo anterior, se archiva la presente solicitud como concluida Se hace de su conocimiento que tiene derecho de interponer recurso de revisión dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se realice la notificación vía electrónica.» (Sic)

## CUARTO. Del recurso de revisión.

Inconforme con la respuesta emitida, la Recurrente interpuso recurso de revisión el día veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, el cual se registró en el SARCOEM con el expediente **06680/INFOEM/AD/RR/2024**, en el que manifestó lo siguiente:

**Acto Impugnado:**

«NO ME ENTREGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA» (Sic)

**Razones o motivos de inconformidad:**

«Ingrese una solicitud en el SARCOEM, el día veintiuno de agosto del año en curso, para solicitar “COPIA CERTIFICADA DEL AVISO DE MOVIMIENTO DE BAJA DEL FALLECIDO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PADRE DE MIS HIJAS MENORES DE EDAD, LO ANTERIOR CON FINES DE INICIAR EL TRAMITE DE PENSIÓN POR ORFANDAD, CLAVE ISSEMYM DEL FALLECIDO XXXXXX.”, por lo que, lo cual adjunte la siguiente información que es: identificación oficial y actas de nacimiento de mis hijas. Posteriormente la Unidad de Transparencia me requirió complementara mi solicitud de acceso a datos, debido a que no anexe el documento mediante el cual mi esposo haya expresado su voluntad para que yo pudiera acceder a sus datos personales, es importante mencionar que no cuento con dicho documento, no obstante, de conformidad con el artículo 106, de la Ley de Acceso a Datos Personales del Estado de México se menciona que: “Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas o de quienes haya sido declarada judicialmente su presunción de muerte, la persona que acredite tener un interés jurídico de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente capítulo, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido, o que exista un mandato judicial para dicho efecto.”, así mismo, de acuerdo con el artículo 122, de la Ley antes citada, el cual menciona que “La interposición de un recurso de revisión de datos personales concernientes a personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo”, por lo tanto, acredito tener un interés legítimo y jurídico, tal como lo demuestro con los documentos que adjunte a la solicitud, así como, los documentos que adjunto al presente: acta de defunción y hoja de requisitos. Por lo anterior, solicito al ISSEMYM, que se me entregue COPIA CERTIFICADA DEL AVISO DE MOVIMIENTO DE BAJA DEL FALLECIDO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, LO ANTERIOR CON FINES DE INICIAR EL TRAMITE DE PENSIÓN PARA MIS HIJOS, CLAVE ISSEMYM DEL FALLECIDO XXXXXXX.» (Sic)

La Recurrente adjuntó al recurso de revisión los documentos denominados **«Pensión por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al servicio \_ ISSEMYM.pdf»** y **«Acta de defunción XXXXXXXXXXXXX.pdf»**, cuyo contenido será referido en el estudio correspondiente.

## QUINTO. Del turno del recurso de revisión.

En fecha veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, el recurso de revisión de mérito se registró en el SARCOEM y fue turnado al **Comisionado Presidente José Martínez Vilchis**, a efecto de que decretara su admisión o desechamiento, ello en términos de los artículos 11 y 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, con relación al diverso 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de aplicación supletoria a la citada Ley de Protección de Datos Personales por disposición de su artículo 11.

## SEXTO. De la admisión del recurso de revisión.

En fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, conforme a lo dispuesto en los artículos 11, 127 y 131, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y el artículo 185, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria, se admitió el presente recurso de revisión a través del acuerdo de admisión respectivo.

Asimismo, derivado del acuerdo de exhortación a la conciliación, tanto el Sujeto Obligado como la Recurrente, accedieron al procedimiento de conciliación dentro del plazo establecido, como se observa en la siguiente imagen



Posteriormente, el Comisionado Ponente emitió el **Acuerdo para señalar día, hora y lugar para la audiencia de la celebración de conciliación,** en el cual se estableció la audiencia de conciliación el día veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro a las 11:30 horas, la cual se desarrolló a través de la plataforma de servicio de videotelefonía denominada Zoom. En este sentido, en la fecha y hora fijadas se celebró la conciliación respectiva, el acuerdo al que llegaron las partes en la audiencia de conciliación, en la que el Sujeto Obligado entregó a la Recurrente la información solicitada. Posteriormente, se notificó el acuerdo de conciliación correspondiente.

## SÉPTIMO. De la etapa de instrucción.

Una vez abierta la etapa de manifestaciones y transcurrido el término legal referido,de las constancias que obran en el SARCOEM, se advierte que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, el Sujeto Obligado presentó su informe justificado mediante los documentos denominados **«INFORME JUSTIFICADO 724.AD.pdf»** y **«ACUSE DE RECIBIDO 724.AD.pdf»**; por lo que en atención al artículo 185, fracción III, de la Ley de Transparencia local, de aplicación supletoria a la ya citada Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados por disposición de su artículo 11, se puso a disposición de la Recurrente en fecha dos de diciembre del año en curso

## OCTAVO. Del cierre de instrucción.

Por lo anterior, en fecha nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, mediante acuerdo del **Comisionado Presidente José Martínez Vilchis**, una vez transcurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas que estimaran convenientes y rindieran alegatos, se decretó el cierre de instrucción, en términos del artículo 185, Fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

# C O N S I D E R A N D O

## PRIMERO. De la competencia.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero; concatenado con los artículos 1, 81, 82 fracciones I y III, 119, 127, 128 y 129, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; 1, 2, fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181, párrafo tercero, 185 y 194, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria de la citada Ley de Protección de Datos en términos de su artículo 11; 9, fracciones I y XXIV, 11 y 14, fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Aunado a lo anterior, este Órgano Garante estima pertinente realizar un pronunciamiento ya que consientes de la situación que se vive en la actualidad a fin de otorgarle a los ciudadanos herramientas ágiles y accesibles para el ejercicio de los derechos humanos que se tutelan, se considera que a pesar de las condiciones a las que nos enfrentamos, se cuentan con las herramientas técnicas y tecnológicas necesarias que eviten mermar el ejercicio de los derechos correspondientes, sin que ello implique el poner en riesgo el diverso derecho a la salud de todos los partícipes en los procesos que conllevan.

## SEGUNDO. Sobre los alcances del recurso de revisión.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de la respuesta, tal y como lo prevé el artículo 128 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, que establece:

**Artículo 128. El titular, por sí mismo o a través de su representante, podrán interponer un recurso de revisión ante el Instituto** o la Unidad de Transparencia del responsable que haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, **dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta**.

Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO sin que se haya emitido ésta, el titular o en su caso, su representante podrán interponer el recurso de revisión dentro de los quince días siguientes al que haya vencido el plazo para dar respuesta.

En esa tesitura, atendiendo a que el Sujeto Obligado notificó la respuesta a la solicitud de acceso a datos personales el día **cuatro de octubre de dos mil veinticuatro**, se tiene que el plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 128, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; en ese tenor, si el recurso de revisión que nos ocupa se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el artículo antes mencionado, toda vez que el medio de impugnación se interpuso el veinticinco de octubre del año en curso.

## TERCERO. Del estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento.

En una aproximación inicial, vale la pena mencionar que el ejercicio de los derechos ARCO se encuentra regulado por el artículo 6 apartado A, y 16, segundo párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que:

«[…] Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales**, al acceso,** rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros […]»

En este sentido, dichas prerrogativas se encuentran invariablemente ligadas a los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.

Con relación a las causales de improcedencia, el artículo 138, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, contempla las siguientes causales:

**Artículo 138.** El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando:

**I.** Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 128 de la presente Ley.

**II.** El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este último.

**III.** El Instituto haya resuelto anteriormente en definitiva sobre la materia del mismo.

**IV.** No se actualice alguna de las causales del recurso de revisión previstas en el artículo 129 de la presente Ley.

**V.** Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente, o en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto.

**VI.** El recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

**VII.** El recurrente no acredite interés jurídico.

El desechamiento no implica la preclusión del derecho del titular para interponer ante el Instituto un nuevo recurso de revisión.

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, resulta oportuno señalar que a la fecha que se resuelve no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia; ya que, la Recurrente presentó su recurso dentro del término de quince días otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento de que el Instituto o, en su caso, los Organismos Garantes hayan resuelto en definitiva sobre la materia del mismo; no se tiene conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por la Recurrente, o en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto o los Organismos garantes, el particular no amplió su solicitud a través de su medio de impugnación.

En ese sentido, se tiene que la Recurrente requirió que **le fuera emitida una copia certificada del aviso de movimiento de baja por el fallecimiento de la persona referida en la solicitud de acceso a datos**, con la finalidad de iniciar el trámite de pensión por orfandad de sus hijos menores de edad.

Para acreditar su solicitud, la Recurrente anexó los siguientes documentos:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.pdf.** Dos actas de nacimiento correspondientes a los hijos menores de la Recurrente y copia de la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral en favor de la solicitante.
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.pdf**. Copia de la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral en favor de la Recurrente.

A dicha solicitud, el Sujeto Obligado requirió a la particular para que presentara el documento con el que acredite la representación de la persona referida en la solicitud mediante un poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos especificando que la representación se le otorgó para el trámite de acceso a datos personales ante ese Sujeto Obligado, debido a que no se observa ningún documento adjunto que acredite la representación y el consentimiento de la persona fallecida; asimismo, se le apercibió con tener por no presentada la solicitud en el supuesto de no desahogar la prevención.

Posteriormente, debido a que la Recurrente no presentó la aclaración, complementación o corrección de datos requerida, el Sujeto Obligado tuvo por no presentada la solicitud de acceso a datos personales.

De tal forma que es menester referir que el contexto para ejercer los derechos ARCO tratándose de personas fallecidas es encuentra estipulado en el artículo 106 párrafos cuarto, quinto y sexto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, normatividad invocada que a la literalidad dispone lo siguiente:

**Legitimación para Ejercer los Derechos ARCO**

**Artículo 106.** […]

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas o de quienes haya sido declarada judicialmente su presunción de muerte, la persona que acredite tener un interés jurídico de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente capítulo, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido, o que exista un mandato judicial para dicho efecto.

El titular podrá autorizar dentro de una cláusula del testamento a las personas que podrán ejercer sus derechos ARCO al momento del fallecimiento.

El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en su caso, por mandato judicial […]

Disposiciones que, en principio, resultan de aplicación estricta para la tramitación del procedimiento que forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de datos personales, como lo es la atención de solicitudes de derechos ARCO, concepto que en términos de lo dispuesto por el artículo 4, fracción XIII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios es relativo a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales.

Ordenamiento al cual se encuentran sujetos los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, en ejercicio de la atribución prevista por el artículo 90, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y en cumplimiento del deber de confidencialidad, establecido en el diverso artículo 40, de la Ley en mención, **que implica que la información no se pondrá a disposición, ni se revelará a individuos, entidades o procesos no autorizados, y que en el caso particular requiere de manera inexorable que el acceso de datos concernientes a personas fallecidas se lleve a cabo, únicamente a favor de quien cuente con un interés jurídico,** para lo cual la Ley reconoce expresamente ese interés jurídico sobre quienes el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido, incluyendo la cláusula testamentaria o que exista un mandato judicial para dicho efecto.

En consecuencia, el ejercicio de derechos ARCO respecto de personas fallecidas a través de las Unidades de Transparencia, únicamente podrá llevarse a cabo por quienes cuenten con interés jurídico, por lo cual conviene señalar lo estipulado por el Poder Judicial de la Federación a través de las Tesis y Jurisprudencias con números de registro 181719, 170500 de la Novena y Décima Épocas, sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, y por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[[1]](#footnote-2), se han pronunciado en cuanto al intereses jurídico en los términos siguientes:

**INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE**.

Tratándose del juicio de garantías, **el interés jurídico** como noción fundamental **lo constituye la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse**, ya sea por la violación de ese derecho, o bien, por el desconocimiento del mismo **por virtud de un acto de autoridad, de ahí que sólo el titular de algún derecho legítimamente protegible pueda acudir ante el órgano jurisdiccional** de amparo en demanda de que cese esa situación cuando se transgreda, por la actuación de cierta autoridad, determinada garantía.

**INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS**.

**El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías**, **que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos**, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como **la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos**, las afectaciones deben igualmente ser **susceptibles de apreciarse en forma objetiva** para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, **sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados**.

Empero, la Ley en la materia establece en su artículo 122 que, para la interposición de un recurso de revisión de datos personales concernientes a personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo.

En virtud de lo anterior, es conveniente recordar que la Recurrente señaló que el documento requerido es necesario para iniciar el trámite de pensión por orfandad en favor de sus hijos menores de edad; por tanto, se debe colegir que actúa en representación de sus hijos, por lo que presentó las actas de nacimiento de los menores en los que se observa que la Recurrente es la madre y la persona fallecida, el padre.

En ese orden de ideas, al presentar los documentos con los que se acredita el parentesco con entre los menores, la solicitante y la persona referida en la solicitud, se cumple con el requisito señalado con anterioridad ya que acredita el interés legítimo, para lo cual sirve de sustento los criterios relevantes que ha emitido nuestro máximo Tribunal Constitucional en cuanto al interés legítimo, a través de las Jurisprudencias y Tesis Aisladas con números de registro 185376, 185377, 2005078 y 2003608 cuyos textos y sentidos literales respectivos, son los siguientes:

**INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL**.

 De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. **En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto.** De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, **al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste.**

**INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**.

De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, **uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses**. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, **el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.**

**INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS. El interés legítimo tiene su origen en las llamadas normas de acción**, las cuales regulan lo relativo a la organización, contenido y procedimientos que han de regir la actividad administrativa, y constituyen una serie de obligaciones a cargo de la administración pública, sin establecer derechos subjetivos, pues al versar sobre la legalidad de actos administrativos o de gobierno, se emiten con el fin de garantizar intereses generales y no particulares. En ese contexto, por **el actuar de la administración, un determinado sujeto de derecho puede llegar a tener una ventaja en relación con los demás, o bien, sufrir un daño**; en este caso, los particulares únicamente se aprovechan de la necesidad de que se observen las normas dictadas en interés colectivo, por lo que a través y como consecuencia de esa observancia resultan ocasionalmente protegidos sus intereses. **Así, el interés legítimo tutela al gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normativa, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad.** Por tanto, el quejoso debe acreditar que se encuentra en esa especial situación que afecta su esfera jurídica con el acatamiento de las llamadas normas de acción, a fin de demostrar su legitimación para instar la acción de amparo.

INTERÉS JURÍDICO **E INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011. SUS DIFERENCIAS.**

Conforme al artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 4 de octubre de 2011, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) **o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo),** el **cual proviene de la afectación a su esfera jurídica**, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias.

Precisado lo anterior, se advierte que la Recurrente acredita su interés legítimo al acceso a datos personales al dar cumplimiento a las formalidades previstas por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

Una vez sentado lo anterior, resulta oportuno traer a colación los artículos 82, fracción XXVIII y 131, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, normatividad invocada cuyo contenido literal es el siguiente:

**Atribuciones del Instituto**

**Artículo 82.** El Instituto, además de las atribuciones encomendadas por la Ley de Transparencia y normatividad aplicable, tendrá las atribuciones siguientes:

[…]

**XXVIII.** Procurar la conciliación entre las autoridades y los titulares de los datos personales en cualquier momento del procedimiento del Recurso de Revisión y en su caso, verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo.

**De la conciliación**

**Artículo 131.** Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto podrá buscar una conciliación entre el titular y el responsable. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto deberá verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo.

Derivado de lo anterior, en referencia al procedimiento de conciliación, se precisan las siguientes consideraciones:

1. La Recurrente requiere la información solicitada para realizar el trámite de pensión por orfandad en favor de sus menores hijos.
2. Dentro de los archivos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se encuentra el aviso de baja de la persona referida en la solicitud con folio **00724/ISSEMYM/AD/2024**; asimismo, señaló que dicho documento consta de una foja.
3. La Recurrente manifestó que el documento que le fue presentado durante la audiencia es el requerido para realizar el trámite en favor de sus hijos.
4. El Sujeto Obligado consideró procedente proporcionar el documento solicitado en la modalidad elegida por la particular sin costo alguno, conforme a lo establecido en el criterio 02/18 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de rubro **Gratuidad de las primeras veinte hojas simples o certificadas**.

Por consiguiente, al levantar el acta de conciliación respectiva se llegó al siguiente acuerdo:

«Por consiguiente, se acuerda que **el Sujeto Obligado haga entrega de la copia certificada referida y que la Recurrente firme el acuse de haber recibido la información solicitada a su entera satisfacción, lo cual se hará del conocimiento de este Instituto durante la etapa de manifestaciones**, lo anterior para que el presente recurso de revisión quede sin materia una vez verificado el cumplimiento de este acuerdo, en términos del artículo 132 fracción V de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.»

Así, de conformidad con lo señalado en la Audiencia de Conciliación, el Sujeto Obligado presentó, los documentos denominados **«INFORME JUSTIFICADO 724.AD.pdf»** y «**ACUSE DE RECIBIDO 724.AD.pdf»**, el cual contiene el acuse de recibido, a entera satisfacción de la Recurrente, del aviso de movimiento de baja solicitado, en el cual hace constar de conformidad a través de la inscripción de su nombre y firma.

De lo anterior, se hace constar que **la Recurrente recibió la información requerida en fecha veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro.**

Una vez sentado lo anterior, al haber llegado a un acuerdo en la audiencia de conciliación y toda vez que la particular tuvo acceso a la información requerida, el recurso de revisión queda sin materia de conformidad con lo establecido por el artículo 132 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, normatividad que a la letra dispone lo siguiente:

**Procedimiento de conciliación**

**Artículo 132.** Admitido el recurso de revisión y sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General, el Instituto **promoverá la conciliación entre las partes,** de conformidad con el procedimiento siguiente:

[…]

**V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes.**

**El recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto, deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo.**

**VI.** El **cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de revisión,** en caso contrario, el Instituto reanudará el procedimiento.

El plazo al que se refiere el artículo siguiente de la presente Ley será suspendido durante el periodo de cumplimiento del acuerdo de conciliación.

En consecuencia, se determina el **SOBRESEIMIENTO** del recurso de revisión por quedarse sin materia, en virtud de que al haber llegado a un acuerdo las partes y al entregarse la información, esto, de conformidad con lo señalado en el artículo 139 fracción V de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, que se transcribe a continuación en la parte aplicable:

**Causales de Sobreseimiento**

**Artículo 139.** El recurso de revisión sólo podrá ser sobreseído cuando:

[…]

**V. Quede sin materia el recurso de revisión**.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2 fracción II, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181, 185 fracción I, 186 y 188 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios de aplicación supletoria, 1, 81, 82 fracciones I y III, 119, 127, 128, 129, 132, 133, 137 y 139 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, este Órgano Garante emite los siguientes:

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Se **SOBRESEE** el recurso de revisión número **06680/INFOEM/AD/RR/2024**, porque quedarse sin materia en términos de los artículos 132 fracción V y 139 fracción V de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, de conformidad con el **Considerando TERCERO** de la presente Resolución.

**SEGUNDO. NOTIFÍQUESE** a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México **(SARCOEM)**, la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE** ala Recurrentela presente resolución, y hágasele del conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/fzh

1. Página 1428, Tomo XIX, abril de 2004; página 225, Tomo XXVII, enero de 2008; página 690, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II; y página 1854, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, respectivamente. [↑](#footnote-ref-2)